

Las relaciones militares de América Latina y el Tiar

OSCAR NUÑEZ

Hasta la Segunda Guerra Mundial, la dependencia económica y la subordinación político-diplomática de la América Latina con respecto a los Estados Unidos se explicó a menudo como una dominación inevitable y casi natural, cuyo último fundamento debía buscarse en las diversas potencialidades de las dos áreas económicas y en sus diversos grados de "civilización". En un clima caracterizado por el conformismo, cuando no por la complicidad pura y simple, sólo esporádicamente se hacía visible la violencia implícita en las relaciones entre la América anglosajona y la América lusoespañola. Tal situación tiende a cambiar los años que preceden, pero, sobre todo, en los que siguen a la última conflagración: por una parte lo que era un sometimiento de hecho, de características semicoloniales, tiende a institucionalizarse en formas jurídicas, políticas e ideológicas cada vez más sistemáticas y complejas, mientras crecen por otra parte, las resistencias al proceso de cristalización de la dependencia.

La evolución de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas en este período es ejemplar. Inicialmente ignoradas por los Estados Unidos como instituciones, como grupo social, como factor político, veinte años más tarde pasan a ser un elemento primordial de la política yanqui, sea para presionar sobre los gobiernos, para subyugar las poblaciones, para imponer su propia estrategia de gran potencia, sea para suplantar, por último, aquellos regímenes que se atreven a desafiar el poderío imperial. También las FF.AA. de América Latina cobraron valor frente a la extensión de la posibilidad norteamericana de enfrentar militarmente a la URSS; por eso el "TIAR" articuló la solidaridad militar del continente; pero esta solidaridad no era mutua sino sustancialmente unilateral, solidaridad exclusiva para Estados Unidos.

Este trabajo se propone describir, en líneas generales, ese proceso. Busca individualizar los factores intelectuales y materiales empleados en la "desnacionalización" de los ejércitos latinoamericanos, señalar los servicios, instituciones y autoridades responsables de esa sistemática degradación, e identificar los casos más elocuentes del empleo de ese aparato militar colonizado en la obra de abatir la soberanía de los países latinoamericanos, y aclarar así por qué el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como régimen de solidaridad militar continental no funcionó ante la operación bélica de Inglaterra contra Argentina.

El formidable poderío militar desarrollado por los Estados Unidos en el curso de la II Guerra Mundial, y el predominio incontrarrestable de su economía en el mundo occidental —materialmente demolido como consecuencia de las acciones bélicas— los transformaron en los últimos años en el corazón y eje del sistema capitalista.

Según las más recientes publicaciones del Centro de Informaciones para la Defensa de Washington, los Estados Unidos han suscrito tratados militares, acuerdos intergubernativos y contratos para la concesión de ayuda militar y venta de armas con 92 países, mientras sus fuerzas propias apostadas en el exterior alcanzaron a 511 mil hombres (además de unos 175 mil mercenarios colocados a su servicio), distribuidos en 222 grandes bases militares y en 2.000 bases más pequeñas, situadas en 40 países. (Estas cifras corresponden al momento de la agresión a Viet-Nam).

Independientemente de sus alianzas formales, los Estados Unidos prestan asesoría militar a 64 Estados, con sus propios consejeros y especialistas, mientras su influencia indirecta alcanza mayores dimensiones aún, a través de la difusión de armas nucleares norteamericanas dispersas en territorios extranjeros o embarcadas a bordo de naves de superficie y submarinos. Se estima que cerca de la mitad del arsenal táctico nuclear norteamericano está emplazado fuera de sus fronteras, principalmente en la República Federal Alemana, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Islandia, España, Portugal, Filipinas, Corea del sur y Turquía.

En el polarizado mundo de nuestros días, un dispositivo bélico de perímetro tan vasto está naturalmente expuesto a fricciones y choques frecuentes y graves en los puntos más remotos del globo, capaces de desencadenar en cualquier momento conflictos de dimensiones mayores. Si nos atenemos a los términos del Tratado

Interamericano de Asistencia Recíproca incluso con sus reformas recientes, cada vez que los Estados Unidos se encuentran envueltos en acciones de este tipo deberán contar con la automática solidaridad de los otros veinte estados contratantes, aun cuando el teatro del enfrentamiento se encuentre a miles de kilómetros de las costas americanas.

Las aludidas disposiciones del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) no son más que la consagración explícita de compromisos políticos anteriores, a los que se les han dado una aprobación multilateral y un contenido inequívocamente militar. La Casa Blanca enunció por primera vez su misión tutelar sobre el continente en 1823, en lo que se ha venido llamando la "doctrina Monroe" y la ejerció sobre los países del sur —particularmente en el área del Caribe— sin limitaciones jurídicas ni morales; pero el TIAR mismo encuentra sus antecedentes más próximos en el proceso diplomático anterior al ingreso de los Estados Unidos en el último conflicto mundial:

—en 1938, en Lima se declara que "los pueblos de América han alcanzado la unidad espiritual", fundada en principios republicanos, en sentimientos de humanidad y tolerancia, y en el respeto de la soberanía de los estados y de las libertades individuales;

—en 1939, en Panamá, se adopta una resolución para extirpar en las Américas "la propaganda de las doctrinas que tienden a poner en peligro el común ideal democrático interamericano", ambiguamente orientada a cambiar la difusión de las ideas nazis, se emite una solemne declaración colectiva de neutralidad ante el conflicto hasta entonces puramente europeo, y se define una *zona de seguridad* en torno al continente, cuyas aguas se comprometen a "conservar libres de todo acto hostil de parte de cualquier nación beligerante no americana" aquellos estados que suscriben el acuerdo;

—en 1940, en La Habana, una Reunión de Consulta declara que "todo atentado de un estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o dependencia política de un estado americano, será considerado, como un acto de agresión contra los estados que firman esta declaración";

—en 1942, en Río de Janeiro, pocas semanas después del ataque japonés a Pearl Harbor, los Estados Unidos logran que se recomiende la ruptura de relaciones diplomáticas con Japón, Alemania, e Ita-

lia "por haber el primero de esos estados agredido y los otros dos declarado la guerra a un país americano"; que se adopten medidas legislativas "tendientes a prevenir o reprimir penalmente actos contra las instituciones democráticas de los Estados del continente"; que se aprueben diversas mociones para reforzar el esfuerzo bélico de los Estados Unidos y, finalmente, que se convoque de inmediato a una reunión de técnicos navales o militares de cada país en Washington, con la finalidad de "estudiar y sugerir a estos (los gobiernos), las medidas necesarias a la defensa del continente". Nace así la Junta Interamericana de Defensa.

Terminada la guerra, este verdadero código de principios y compromisos multilaterales que se da en llamar el "Sistema Interamericano" se desplaza bruscamente de la brumosa retórica inicial y de la subsiguiente oposición a las potencias del Pacto Tripartito —que inspiró su acción durante el conflicto— hacia una genérica defensa del hemisferio contra una eventual agresión extracontinental que, cada vez con mayor precisión se supone provenir de la Unión Soviética.

En agosto del 47, poco después de un año del famoso discurso de Churchill en el Westminster College, Fulton, que anuncia el advenimiento de la guerra fría, nace en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, basamento jurídico de la dependencia militar latinoamericana e instrumento en que se apoya la ideología y la doctrina estratégica de sus Fuerzas Armadas. Los conceptos *seguridad colectiva* y de *unidad de intereses* de los países del Nuevo Mundo sirven para justificar la solidaridad incondicional de los firmantes con el estado Americano hipotéticamente agredido por una potencia de ultramar, lo que obviamente significa hacer de las naciones latinoamericanas aliados subalternos de los Estados Unidos, único país del área con intereses políticos de proyección mundial. Desde entonces, los enemigos de los Estados Unidos son, sin alternativa, enemigos también de cada una de las naciones latinoamericanas. Pero los enemigos de la soberanía de algún país latinoamericano no son para ningún efecto, enemigos de los Estados Unidos.

Suscrito el TIAR, los pasos siguientes se dirigen a establecer un sólido control del Pentágono sobre los institutos armados, en nombre, precisamente, de la común doctrina estratégica.

a) Con relación a las armas y el equipo militar, es la época de vo-

luminosas transferencias de material de guerra de todos los tipos de calidad de préstamos y donaciones, en el marco de convenios bilaterales. Los excedentes del conflicto 1939/45 sirven para montar una operación altamente lucrativa, tanto desde el punto de vista económico como político: se recuperaba parte del valor del material militarmente obsoleto para las necesidades yanquis, y simultáneamente se aseguraba una mayor dependencia logística y una más estrecha vinculación con la industria de guerra norteamericana, a través de la provisión de municiones y repuestos, del país beneficiado.

- b) En el orden político, a partir de 1952 se suscriben 17 pactos de asistencia militar (PAM) entre los Estados Unidos y las Repúblicas del sur. Junto con reglamentar la concesión de material y de servicios, algunos de tales convenios —como el firmado por Chile, en 1952— comprometen al país subalterno “a soportar la plena contribución que le permitan sus recursos humanos, sus riquezas, sus facilidades y su estado económico general para acrecentar y mantener su propia fuerza defensiva, así como la fuerza defensiva del mundo libre”.
- c) En el campo del entrenamiento militar, entre 1950 y 1972, 61.032 militares latinoamericanos reciben entrenamiento en los Estados Unidos y en sus escuelas y cursos del exterior, de los cuales 7.578 son brasileños, 5.785 peruanos y 4.932 chilenos. Sobre la importancia que se asigna a estas actividades, escuchemos a Robert Mc Namara: “Probablemente la mayor retribución que nos da nuestra inversión de asistencia militar provenga del adiestramiento de oficiales claves escogidos en nuestras escuelas militares y Centros de Adiestramiento en los Estados Unidos y en ultramar. Estos estudiantes son los elegidos en sus países para que sean instructores cuando regresen a sus patrias. Son los futuros líderes (i. . .) no necesito explayarme acerca del valor de tener en posiciones de liderazgo a hombres con un conocimiento de primera mano sobre cómo hacen los norteamericanos las cosas y cómo piensan. No tiene precio para nosotros hacer de esos hombres nuestros amigos”.

La llamada “Declaración de Caracas”, en 1954, señala un vuelco en las concepciones norteamericanas que habrán de cristalizar años más tarde, durante la administración Kennedy. Allí se lee: “El dominio o control de las instituciones po-

líticas de cualquier estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituirá una amenaza a la soberanía y a la independencia política de los estados americanos que pondría en peligro la paz de América y exigiría una reunión de consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes, de acuerdo con los tratados existentes". La atención de Washington se vuelve aquí al interior del continente, hacia los signos de rebelión que surgen desde las masas latinoamericanas frente a las condiciones generalizadas de miseria, tiranía, corrupción y sometimiento a los intereses extranjeros. Una agitación que amaga el predominio de las viejas clases dominantes pero también la Hegemonía Norteamericana.

Será necesario esperar la derrota de los ejércitos colonialistas franceses en Dien Bien Phu, la victoria de la revolución en Cuba y la nueva perspectiva kennediana sobre la misión y las tareas de los Estados Unidos en América y en el mundo, para comprobar un giro sustancial en la política militar yanqui hacia la América Latina.

Para los oficiales de formación clásica, la victoria del pequeño pueblo asiático, desprovisto de recursos bélicos y económicos, sobre unidades escogidas de una gran potencia europea, señaló las necesidades de estudiar a fondo este nuevo tipo de guerra: la guerra irregular. Como lo analiza Horacio Veneroni en su libro destinado a estos temas, las conclusiones de los expertos fueron insuficientes y parciales. La ciencia militar tradicional logró identificar los principales elementos técnicos y operativos de la guerra popular de liberación, pero su respuesta fue inepta para penetrar en las raíces sociales y políticas de esta nueva forma de lucha; su respuesta fue entonces, la formulación de una doctrina bélica de *contrainsurgencia* que, incapaz de comprender las motivaciones reales del alzamiento colectivo, termina por atribuir los movimientos revolucionarios y de liberación a cierto "Comunismo Internacional", genérico y simplista, aislándolos de las circunstancias locales e históricas que le proporcionan audiencia en las masas, capacidad política y ardor *combativo*.

Este enfoque sin embargo, con todas sus insuficiencias, obró con mucha fuerza en la reorientación de la política Militar norteamer-

ricana. Un segundo elemento lo constituyó el colapso del ejército bastistiano, generosamente atendido por el Pentágono, y el curso vigorosamente antiimperialista de la revolución cubana.

Simultáneamente, la estrategia global norteamericana sufre los efectos derivados de la paridad nuclear alcanzada por la Unión Soviética. Las perspectivas de una destrucción mutua, como resultado de la inevitable represalia atómica, le induce a revisar las grandes líneas de su estrategia anterior. Junto con perder el monopolio del poder nuclear, los Estados Unidos ven desmoronarse los fundamentos de la "represalia masiva" en que descansaba su política hasta aquí, para dar paso a una estrategia flexible, de respuestas graduadas, que permita eludir el choque frontal. Los eventuales conflictos fueron catalogados en una escala de gravedad decreciente, en cuyos últimos tramos se situaba la *guerra subversiva*.

América Latina era uno de los teatros potenciales de este último tipo de guerra, y con arreglo a tal perspectiva, Kennedy elabora su propia concepción sobre la defensa hemisférica, cuyos elementos principales serán la *Seguridad y el Desarrollo!*.

Las Fuerzas Armadas latinoamericanas no se consideran ya un factor significativo en el hipotético enfrentamiento con la Unión Soviética y el bloque socialista; su rol se reduce al mantenimiento del orden interno, esto es, a garantizar la "seguridad" del continente y de cada una de sus unidades nacionales. Su complemento es el "desarrollo" —inspirador de la Alianza para el Progreso— destinado a atacar las causas de la inquietud social mediante la elevación de los niveles de vida de las masas populares.

La Nueva Política se Proyecta en Diversos Planos:

- a) En el terreno diplomático, el sistema laboriosamente tejido en la postguerra con el objeto aparente de promover la democracia, la paz, la independencia, adquiere una explícita definición antisocialista. En la Octava Reunión de Consulta (1962) entre los fundamentos de la resolución que excluye a Cuba del sistema interamericano, se declara que "la adhesión de cualquier miembro de la O.E.A. (Organización de Estados Americanos) al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano". En la novena Reunión de Consulta (1964) el empleo de la OEA como instrumento de dominación se hace más ostensible y riguroso. Se resuelve la ruptura

colectiva de relaciones con el gobierno revolucionario, se inicia el bloqueo comercial de la isla y se amenaza explícitamente con el uso de la fuerza armada para abatir el nuevo régimen. El fracaso de la tentativa consagrado en el "Protocolo de Reformas al TIAR" (1975), constituye una brillante victoria diplomática de la Revolución Cubana, pero no altera la sustancia imperialista del Tratado.

- b) En el campo militar, el gobierno Kennedy desalienta la adquisición del material de guerra que se considera caro y sofisticado en la América Latina, y promueve, en cambio, la provisión de armamento y equipo aptos para operaciones antiguerrilleras. La motivación de fondo de tales reajustes está, por supuesto, en la nueva concepción del Pentágono acerca del empleo de las fuerzas armadas latinoamericanas, pero, para justificarlos se ofrecen argumentos más atractivos y menos humillantes. La razón principal, se dice, consiste en evitar que naciones pobres, laceradas por graves injusticias sociales y hondos desequilibrios económicos empleen recursos excesivos en la adquisición de material y armamento de tecnología avanzada. En este período el principal instrumento para plasmar la nueva orientación sigue siendo el Programa de Asistencia Militar (Military Assistance Program), pero, simultáneamente, y bajo la inspiración personal de Kennedy se da un gran impulso al reforzamiento técnico y material de los cuerpos policiales.

El nuevo papel asignado a los militares de los estados satélites exige dedicar una mayor atención al adiestramiento y formación de oficiales y suboficiales en las escuelas norteamericanas, tanto desde el punto de vista profesional como ideológico, y, asimismo, una asesoría estadounidense ligada a los mandos nacionales de los ejércitos del sur.

- c) En el orden político la misión de gendarme del imperialismo asumida por el gobierno norteamericano, lo lleva a una brutal intervención contra Cuba, en abril de 1961, y contra Santo Domingo cuatro años después. Si bien los esfuerzos para crear una fuerza militar interamericana bajo la dependencia del Pentágono fracasan, tales tentativas dejan una odiosa prueba de su carácter colonialista en la invasión de la República Dominicana.

Por esta misma época, los compromisos contraídos en el marco de

la O.E.A. y las doctrinas anti-insurreccionales muestran su verdadero espíritu. En el Diccionario de Términos militares de los Estados Unidos (Dictionary of United States Military Terms for joint Usage), podemos leer que "insurrección" es el estado que "como consecuencia de una revolución o alzamiento contra un *gobierno constituido*, sitúa un país al borde de la guerra civil". Mucho antes y en diversas latitudes —en Guatemala, por ejemplo— los Estados Unidos habían dejado de lado los escrúpulos para embarcarse más o menos abiertamente en agresiones destinadas a derrocar gobiernos legítimos, pero es después del ataque de los *marines* contra las fuerzas constitucionalistas dominicanas y del apoyo estadounidense a la conspiración contra el presidente Goulart que todas las dudas se disipan. Aparece claro que el verdadero enemigo del sistema interamericano no es la insurrección comunista; en realidad, es cualquier resistencia a la dominación imperial la que está condenada, sea que surja en la base, para luchar por el poder, sea que alcance por los medios más democráticos el control del Estado. La más dramática comprobación la dieron los sucesos de Chile, en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno democrático de Salvador Allende, que pese a su riguroso respeto por las leyes nacionales vigentes, por las instituciones, por la constitución política, por los tratados internacionales, fue alevosamente destruido con la comprobada participación del gobierno de los Estados Unidos.

Por largo tiempo los Estados Unidos fueron la fuente más exclusiva del aprovisionamiento latinoamericano de armas y equipo bélico, asegurándose así la fidelidad del aparato militar y, principalmente, de sus jefes. La renovación oportuna del material, los stocks de repuestos, las municiones, el adiestramiento del personal idóneo, exigían mantener con la potencia protectora una relación regular de dependencia. Las circunstancias de que los equilibrios internos del continente dependieran, en último término del favor o de las preferencias de los administradores del programa, agregaba un decisivo factor de sometimiento de los altos mandos castrenses temerosos de que cualquier manifestación de disidencia los privara de los apoyos logísticos norteamericanos y concediera ventajas a naciones potencialmente rivales.

En 1968 se complementa el Programa de Asistencia con la Ley de Ventas Militares al Exterior (Foreign Military Sales Act), que permite atender los mercados latinoamericanos con mayor liberalidad. Las restricciones impuestas en los años anteriores comienzan

a presionar a sus gobiernos para buscar fuentes alternativas de suministros bélicos. El temor a perder clientes tradicionales había hecho que desde los primeros años de la década del 60 y a pesar de los criterios inspirados por Kennedy, las ventas reemplazaran velozmente a las condiciones y préstamos del programa de Asistencia Militar, pero es la promulgación de la nueva ley la que da un impulso decisivo al comercio de armas en los años siguientes.

Durante el gobierno de Nixon, la presencia de Mc Namara en la dirección de la defensa se caracteriza por una gran expansión de los negocios del complejo militar industrial. El presidente toma nota de las recomendaciones del Informe Rockefeller, cuando reconoce las necesidades de satisfacer el "comprensible orgullo profesional que origina deseos igualmente comprensibles por armas modernas" y da los primeros pasos para transferir la responsabilidad del orden interno en los países aliados a las tropas nativas, doctrina que culmina en 1972 con la "vietnamización" del conflicto asiático. Como consecuencia las ventas militares a la América Latina se elevan en 1974 a 309 millones de dólares contra poco más de 21 millones entregados por conducto del PAM, de manera que a estas alturas las donaciones y préstamos representan mucho menos del diez por ciento del monto de las transacciones propiamente comerciales.

Davis Pockard, Secretario delegado de Defensa, había definido la esencia de la doctrina antedicha cuando reconoce que "coloca el Programa de Asistencia Militar y a las ventas militares en una posición especial dentro de nuestra política externa". Una forma un poco más sutil de reiterar los conceptos de William Perreaut, vicepresidente de la Lockheed Aircraft: "cuando uno compra un avión —dijo— también compra un abastecedor de repuestos y una línea de abastecimientos; en otras palabras uno adquiere un socio político".

La colocación de material guerrero es promovida por el gobierno norteamericano desde un complicado aparato administrativo-comercial dependiente del Departamento de Defensa, que sería largo e innecesario describir aquí. Vale la pena, señalar, sin embargo, que ocupa allí un lugar destacado la Sección de Negociaciones Logísticas Internacionales (International Logistic Negotiations Section) manejada desde 1961 por el secretario delegado de Defensa Herry J. Kuss Jr. Este servicio, pieza principal en los negocios bélicos, está estrechamente ligado al mundo de las grandes empresas a

través del consejo asesor de Defensa e Industria (Defensa-Industry Advisory Council —DIAC), integrado por representantes de veinticinco poderosas firmas fabricantes de equipos militares y armas. En el comité de Exportaciones Militares del DIAC ocupan posiciones privilegiadas las firmas constructoras de aviones tales como la Northop y la Lockheed, que están así en condiciones inmejorables para obtener fabulosos contratos. A sus influencias en los más altos niveles norteamericanos de decisión agregan a menudo el poder de sus propios agentes en el aparato militar de los países compradores como se vio en Francia, a propósito del "affaire" Stephlin. Por último, el mismo centro dirige y articula la intervención de los Grupos Asesores de Asistencia Militar, agregados a las embajadas y facilita el financiamiento de las operaciones de venta, principalmente a través de créditos de Export and Import Bank (Eximbank).

Otros elementos a la tendencia a delegar responsabilidades militares en los países aliados y subalternos lo constituye el reemplazo de las tropas norteamericanas por tropas locales en las operaciones represivas. Cuando Mc Namara presentó el programa de asistencia para 1967, expresó: los Estados Unidos no pueden estar en todos los lugares simultáneamente. . . la balanza de fuerzas y las alternativas variables que nos desafían en el cambiante mundo contemporáneo solo pueden ser enfrentadas por amigos leales, bien equipados y listos para llevar a cabo las tareas asignadas a ellos. . . El PAM ha sido ideado para conquistar tales fuerzas y alternativas ya que ayuda a mantener fuerzas militares que complementan nuestras propias fuerzas armadas". No sólo el costo del material destinado a la contra insurgencia se descarga progresivamente sobre los presupuestos de los países satelizados, sino que deben ser también soldados nativos los que se empleen en el combate. Un negocio redondo, sin duda, como ahorro de sacrificios humanos para la metrópoli, pero también en el sentido más prosaico de las palabras: el mismo Mc Namara ha calculado alguna vez que mientras el costo de un soldado norteamericano es de 4.400 dólares al año, el de un soldado encuadrado en formaciones locales es apenas de 540 dólares en el mismo período.

Con diferentes pretextos, durante su administración, Nixon utilizó ciertas facultades excepcionales consignadas en la Ley de Ventas Militares para elevar el tope de las transferencias a la América Latina de 75 a 150 millones de dólares anuales, y en 1973 antes de verse forzado a dejar la presidencia en las condiciones conocidas abrió

definitivamente el acceso a las armas de tecnología superior, tales como cazabombarderos supersónicos, a los compradores del tercer mundo.

Cada vez que el gobierno de Washington se ha visto limitado por consideraciones legales o políticas para colocar su producción bélica en ciertos países, han encontrado manera de salvar el obstáculo mediante el sistema que se viene llamando "arreglo del Tercer País", en cuya virtud los Estados Unidos autorizan a un gobierno extranjero para ceder armas y equipos ya comprados por éste o que fabrica en su territorio bajo licencia estadounidense. Este procedimiento oblicuo se emplea cuando la venta entra en conflicto con la política oficial o contraviene compromisos internacionales. Así, helicópteros Boeing fabricados por Italia fueron transferidos a Irán evitando que una participación directa de Washington apareciera amenazando el delicado equilibrio militar del medio Oriente. Del mismo modo Israel ha sido utilizado como intermediario para colocar equipo en Sudáfrica aunque tal vez el caso más espectacular y conocido sea el de los casos Sabra F 85, que llegaron en 1967 a Pakistán país contra el cual los Estados Unidos mantenían oficialmente un embargo de armas. Los aviones habían sido fabricados en Canadá, bajo licencia norteamericana y condicionados a su venta exclusiva a Alemania Federal; aparecieron sin embargo en Irán, vendidos por su país de origen. Actualmente existen abundantes denuncias en el sentido de que el Pentágono, con este mecanismo proporcione a la junta chilena un volumen de armas muy superior al que acostumbra admitir.

Vender a los países vasallos las armas con que los intereses norteamericanos se defienden del descontento popular, en lugar de regalarlas; sustituir, en seguida sus propios soldados, por soldados indígenas, son los pasos principales en la política militar yanqui de los últimos años. Un tercer aspecto, no obstante, de tanto relieve como los anteriores, lo constituye la formación profesional y política de oficiales y suboficiales de los ejércitos locales. Poco se adelantaría, en verdad, con armas y hombres en número suficiente, si no se logra introducir una fuerte motivación política en los combatientes y, con mayor razón, en sus jefes. Es la tarea que corresponde a una red de establecimientos militares destinados a instruir al personal extranjero, o principalmente norteamericano. Los más conocidos son; Fort Bragg en Carolina del Norte; Fort Sherman, en la zona del Canal de Panamá, donde se encontraban también Fort Clayton, Fort Gulik y la base aérea de Albrock: En Fort

Sherman se hallaba la escuela de guerra en la Jungla (U.S. Army Jungle Warfare School), con cursos de especialización para el combate en comarcas selváticas. En Fort Clayton funcionó la (Cartographic school of Interamerican Geodetic Survey), Escuela para la preparación de expertos en cartografía. En Fort Gulik la "Escuela de las Américas del ejército de los Estados Unidos" de la cual nos ocuparemos más adelante, compuesta por un departamento de Comando, uno de Operaciones, uno de Logística y uno Técnico. En la misma área la base Albrook destinada al entrenamiento de personal de aviación militar, de donde habían egresado 9.301 alumnos hasta diciembre de 1969, de los cuales conviene subrayar que solo un 50% eran oficiales. En Quarry Heights, también en la zona del Canal, el comando Sud de los Estados Unidos (Southcom), acerca de cuyo importante rol daremos enseguida algunas informaciones.

La Escuela de las Américas, el centro principal de este impresionante complejo, fue establecida en 1949 por el Pentágono, con la finalidad específica de entrenar oficiales latinoamericanos para aplastar los movimientos de liberación. Desde entonces se preparó unos 30.000 oficiales que una vez egresados de sus aulas, mantienen una estrecha vinculación con los jefes militares norteamericanos y con las variadas dependencias y actividades del Departamento de Defensa. Gregorio Selser, en uno de los Cuadernos de "Crisis" publicado en Buenos Aires y dedicado al Pentágono, reproduce las siguientes palabras de un periodista norteamericano sobre los inquietantes logros de la Escuela: "los militares chilenos, que tomaron el control del país el mes pasado, poseen seis graduados en la Escuela Militar de las Américas que ocupan rangos de alta jerarquía. Estos son el Jefe de Inteligencia y los comandantes de la Segunda División y División de Apoyo de Santiago, de la tercera División de Infantería en Concepción, de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y de la Escuela de Paracaidistas y Tropas Especiales, Próxima a Santiago", a la que agregaba la siguiente estimación más general "diseminados a través de América del Sur y el Caribe, más de 170 graduados en la Escuela de las Américas, de Estados Unidos, son hoy jefes de Inteligencia". Su Director el Coronel William W. Nairn, tenía sus razones para estar satisfecho, cuando proporcionaba tal información al cronista Drew Midlenton del "New York Times".

En este mismo punto —Fort Gulik— bajo la dirección inmediata del Pentágono y en colaboración directa con la CIA opera el 6o. Grupo de Fuerzas Especiales (boinas verdes) de los Estados Uni-

dos. Estaba destinada a intervenir con la máxima rapidez en cualquier punto del continente, cuando fuere necesario reforzar las tropas locales.

La prensa norteamericana acostumbra destacar que entre los méritos militares de los boinas verdes se inscribe su aptitud para matar de treinta y dos formas diferentes. . . sin apelar al uso de las armas. Complemento poco conocido del "American way of life".

Desde esta unidad partieron, en abril de 1967, el mayor Ralph "Pappy" Shelton y dieciseis boinas verdes con destino a Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano. Su misión era la de servir de instructores de los "rangers" encargados de rastrear y ultimar al Comandante Guevara, como efectivamente ocurriera seis meses después. Una misión que es todo un símbolo del grado en que los ejércitos de la América del Sur han llegado a ser meras dependencias Coloniales del omnipotente comando del Sud (Southcom).

Como todo el dispositivo hemisférico de defensa se entiende destinado a contener una hipotética expansión soviética y, en última instancia, es el gobierno de Washington el que se reserva el derecho de calificar las manifestaciones políticas como legítimas o subversivas, la instrucción de los militares se inspira en una rigurosa lealtad hacia los intereses yanquis y en una hostilidad irreductible y sistemática con respecto a cualquier tendencia revolucionaria, o siquiera anti-imperialista o democrática. De tal manera, el acceso al poder de una corriente progresista aún por medios inobjetablemente electorales, puede justificar un golpe contra el gobierno en nombre de las doctrinas antisubversivas —como ha ocurrido en el *putch* de los militares chilenos— sin que sus autores encuentren la menor contradicción entre su conducta y sus promesas. En la América Latina la "democracia" ha terminado siendo un régimen en que la soberanía popular es sustituida por la ocupación militar, abierta o disimulada, de tropas coloniales nativas a las órdenes del Pentágono.

Es esta degradación penosa la que permite afirmar que las fuerzas armadas latinoamericanas se han "desnacionalizado". Sus objetivos fundamentales dejaron de ser la seguridad de las fronteras y la protección de la soberanía de cada estado, para integrarse en un sistema militar destinado a perpetuar la dominación del capital extranjero. En un grado o en otro, han dejado de ser expresión de la independencia de aquellas naciones, para transformarse en agentes

de su esclavitud económica y política. Fuera del singular caso peruano, sería difícil sostener que algún otro ejército haya escapado a este destino.

En el hecho, El comando del Sud del Ejército norteamericano actúa como instancia jerárquica suprema sobre el conjunto. Sus funciones y su carácter, según un informe elaborado para el Subcomité de política Nacional de Seguridad del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, citado por Horacio Veneroni, serían "La supervisión de la mayor parte de las actividades de las misiones Militares de los Estados Unidos, en América Latina incluyendo sus funciones de mantenimiento", y "al área en la cual es responsable por la protección y acrecentamiento de los intereses de los Estados Unidos incluidos en las áreas terrestres de Sudamérica y América Central, incluyendo México". Tiene tres misiones básicas —continúa el informe— primero, es directamente responsable para eventuales situaciones críticas en países de América Latina los cuales podrían requerir una respuesta militar de los Estados Unidos. . . la presencia militar de los Estados Unidos en la zona del canal sirve como confiable disuasivo al aventurerismo de los elementos radicales, quienes estarían más activos en el hemisferio si no existiera el Comando del Sud. Tercero, el comando conjunto supervisa la asistencia militar a las naciones de la región incluyendo asesores representativos estadounidenses, equipos de entrenamiento solicitados por los países latinoamericanos y el sistema de Escuelas Militares en la Zonadel Canal".

Para despejar las últimas dudas continúa el mismo documento: "Teniendo los Estados Unidos un Mayor dominio en la América Latina, se sostuvo, este país demuestra su interés por ese continente, su activa participación en la seguridad regional colectiva y su apoyo al Tratado de Río. El jefe del Comando del Sud juega una parte esencial al mantener una estrecha relación con los jefes militares en cada país del área. Conforme con el punto de vista prevaleciente en el comando del Sud, los militares latinoamericanos juegan un papel más importante en la vida política nacional, lo apruebe o no los Estados Unidos, y sus opiniones tienen efecto directo en las posibilidades para alcanzar los objetivos de los Estados Unidos en cada país. Por lo tanto, el jefe del comando del Sud y su Estado Mayor proclaman que ellos están en la posición desde la que pueden ejercer la *máxima influencia constructiva* sobre las fuerzas armadas de la América Latina no solamente en materia militar, sino también en apoyo de la modernización, política social y económica".

Pese a que el gobierno de Washington vino a descubrir el rol fundamental de la policía en los países subdesarrollados únicamente en la administración Kennedy, ya desde 1954 venía proporcionando equipo, armas y adiestramiento a los servicios de un grupo de países satélites. Santo Domingo y Venezuela, en América Latina, y Vietnam, en el Asia, tuvieron un tratamiento privilegiado. Según informes de la AID (Agencia Internacional de Desarrollo), más de un millón de policías extranjeros han recibido instrucción y material a través del programa norteamericano de "seguridad pública" de los cuales no menos de 100 mil agentes brasileños y 85 mil de Vietnam del Sur.

El objeto de esta ayuda lo explica así David Bell Administrador de AID, ante el senado: "no cabe duda —dice— de que los Estados Unidos tienen un gran interés en la creación y mantenimiento de un clima y orden del imperio de la ley, bajo control humanitario y según conceptos civiles. . . cuando ello es necesario, se ayuda técnicamente a la policía de las naciones en desarrollo, a fin de que puedan cumplir sus obligaciones y fomenten y protejan los intereses de Estados Unidos".

A partir de 1962 el Programa de Seguridad se expande y las actividades de ayuda policial se concentran en la Oficina de Seguridad Pública (Office of Public Safety — O.P.S.) de la AID. Por la misma época se crea la Academia Interamericana de Policía, en la Zona del Canal, trasladada después con el nombre de Academia Internacional de Policía.

Los gastos del programa de seguridad crecen entre 1961 y 1968, para reducirse gradualmente en los años posteriores. Aquellos de la AID desembolsados en la América Latina alcanzaron a más de 43 millones de dólares en los años fiscales 1961/69, lo que equivale a una quinta parte del presupuesto total de la Agencia, cuya principal atención se dirigía en esos mismos años al sudeste asiático. En el mismo período, en cambio, 3.166 policías latinoamericanos sobre un total de 5.547 fueron adiestrados en los Estados Unidos.

Sobran los testimonios para comprobar la finalidad eminentemente política de estas erogaciones. U. Alexis Johnson Subsecretario del Estado a cargo de los programas policiales se dirigió a los graduados en la Academia Internacional del año 71 con estas palabras: "Prestó (el presidente Kennedy) un interés muy especial a

nuestros programas, pues estaba firmemente convencido de que las fuerzas policiales son un elemento básico para resistir las amenazas planteadas por la insurrección y subversión internas, enemigas, en sí mismas del crecimiento y de la estabilidad que el presidente Kennedy propugnaba”.

Si se recuerda que los ejércitos de la América Latina, solo entre 1950 y 1969, vale decir, antes que tomara impulso la furiosa carrera armamentista, recibieron de los Estados Unidos, armas, servicios y adiestramientos por valor de 1.357 millones de dólares, se explica el absoluto predominio de la superpotencia en el campo militar y la situación de fuerza en que se encuentran para imponer a las fuerzas armadas del área sus propias orientaciones estratégicas y operativas. La mentalidad de la mayoría abrumadora de los oficiales, moldeada en las nociones de seguridad interna y de contra insurrección, es el fruto de veinte años de control consecutivo, sobre el adiestramiento, la organización y el aprovisionamiento de armas y equipo bélico de parte del Pentágono, establecido —es indispensable decirlo— con la abyecta complicidad de los dirigentes políticos nativos.

Hemos recordado anteriormente cómo naciera la Junta Interamericana de Defensa, bajo la presión de los acontecimientos de la época. Tres años después (1945), en la conferencia de Chapultepec, otra Conferencia Interamericana replantea el asunto con vistas a darle un carácter permanente, integrarla con representantes directos de los Estados Mayores —no de los gobiernos— y, en general, fortalecer su autoridad en el sistema. Comienza así un largo y accidentado proceso destinado a institucionalizar la colaboración y coordinación militares a escala continental bajo la forma de un consejo militar, de un Estado Mayor supranacional, y, finalmente, de una fuerza interamericana de paz. Los planes norteamericanos no llegaron nunca a prosperar, y la Junta Interamericana se mantiene hasta hoy, formalmente al menos, dentro de sus líneas iniciales. Al historiador Arthur M. Schessinger Jr. —que fuera asesor de Kennedy— le debemos la siguiente descripción de los propósitos del Pentágono: “Después de la guerra, el Departamento de Defensa mantuvo que las relaciones militares con los gobiernos latinoamericanos deberían ampliarse en interés de la seguridad de los Estados Unidos. En el año de 1947 propuso Truman, obedeciendo a las peticiones del Pentágono, “Normalizar” la organización militar, los métodos de entrenamiento y el equipamiento, a todo lo largo del hemisferio, con la evidente esperanza de llegar a establecer un ejército con generalato estadounidense”.

Los Estados Unidos oficializan su aspiración de constituir una fuerza supranacional, para sancionar formalmente, una ya antigua dependencia de hecho, en 1961, sin lograr desde entonces resultados apreciables. A pesar de ello el congreso Federal en diferentes leyes promulgadas hasta 1973 por lo menos, ha venido destinando fuertes partidas para "una fuerza militar interamericana bajo control de la O.E. A. sin esperar que ni la O.E.A. ni ningún acuerdo internacional la hayan jamás autorizado". Como se sabe la única vez que formaciones de esta naturaleza, lucharon bajo una bandera común fue con motivo de la ominosa invasión de la República Dominicana. Unos 1600 soldados de la América dominada sirvieron de cobertura para disfrazar como empresa de pacificación un ataque ilegal y despiadado de los "marines" contra las tropas constitucionalistas y el pueblo dominicano en armas. Para justificar la operación, el Departamento de Estado y sus cómplices latinoamericanos debieron atropellar hasta las propias normas reglamentarias de la O.E.A. alcanzando el quorum indispensable con el voto del embajador de un gobierno que unas semanas antes había dejado de existir.

Después de este episodio, se insiste en varias ocasiones en la necesidad de dar mayor originalidad al sistema de defensa hemisférica y, particularmente, en proporcionar estabilidad al órgano supranacional de la coordinación; al mismo tiempo que se procura investirlo de autoridad independiente de los órganos interamericanos de naturaleza política; la falta de frutos concretos en esta dirección alentó el uso de procedimientos alternativos para alcanzar los mismos fines. Así, las conferencias de los Ejércitos Americanos se vienen desarrollando desde 1961; no tienen otra finalidad que la de estrechar los lazos políticos de los altos mandos continentales para controlar la empresa contrarrevolucionaria. Las últimas de ellas, como la celebrada en Uruguay, se han destinado a considerar "la agresión del comunismo internacional en el Continente". Las marinas de guerra y las fuerzas aéreas realizan ocasionalmente reuniones del mismo nivel y naturaleza. Con menos ruido hasta 1973, se habían realizado siete Conferencias Americanas de Inteligencia Militar. Descartada la idea de que tales reuniones pudieran servir para un mutuo canje de informaciones de espionaje —gentileza que carecería de precedentes históricos— sólo cabe atribuirles un propósito groseramente político, realizado muchas veces a espaldas del poder civil. Este último tiempo, las reuniones militares interamericanas, orientadas políticamente por el interés de Estados Unidos son prácticas habituales.

La Novena Conferencia de los Ejércitos, llevada a cabo en Fort Bragg, Estados Unidos en 1969, aprobó el acuerdo III, letra B para que "se emprenda un estudio para establecer las líneas fundamentales de doctrina sobre la política y la estrategia que han de seguir los países de América Latina en sus esfuerzos hacia el desarrollo, así como contra la agresión por parte del Comunismo Internacional". Recomienda, asimismo, que la Junta Interamericana de Defensa estudie la viabilidad de proveer una secretaría permanente para la C.E.A. —Conferencia de Ejércitos Americanos— así como la asociación institucional de la C.E.A. con la J.I.D. —Junta Interamericana de Defensa—. El acuerdo X, propuesto por los Estados Unidos y aprobado por unanimidad, recomienda en relación con la enseñanza de las fuerzas de tierra: "E) se debe hacer hincapié en la hermandad y en los aspectos del patrimonio democrático de las repúblicas americanas, así como en los temas antisubversivos y anticomunistas".

Una última forma de integración progresiva se encuentra en las maniobras y ejercicios conjuntos, de los cuales la llamada "Operación Unitas", de carácter aeronaval constituye el mejor ejemplo. Por la vía de acceso al material y a las técnicas modernas, los altos oficiales hallan aquí una justificación profesional para incorporarse sin reservas, a prácticas bélicas inspiradas en concepciones estratégicas foráneas y ejecutadas bajo el mando de oficiales extranjeros. Los lazos de dependencia se hacen tan fuertes y se debilita tanto el sentido del deber nacional, que el propio gobierno de Allende se vio constreñido a aceptar la realización de tales ejercicios en los días cercanos al golpe de septiembre aun cuando varios años antes el Senado chileno, pese a que la izquierda era una minoría, había decidido poner fin a tales programas.

Si tan numerosas y tenaces iniciativas no han dado resultados definitivos en el sentido de institucionalizar un verdadero Sistema Militar al gusto del Pentágono, han sido, en cambio, particularmente fructuosas en la manipulación directa de los ejércitos locales para colocarlos al servicio de los intereses norteamericanos.

En dimensiones geográficas más reducidas, el modelo yanqui de integración Militar se ha impuesto en América Central, agrupando Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. El Consejo de Defensa Centro Americano (CONDECA), en funciones desde 1964, viene presentando una respuesta a la amenaza de una agresión comunista proveniente del Caribe, pero, en la práctica, su fi-

nalidad efectiva ha consistido por muchos años en servir de apoyo a los planes de los exiliados cubanos y de la CIA contra el gobierno de Fidel Castro, agregando hoy la lucha antisandinista y los planes contra los movimientos democráticos en el Salvador y Guatemala.

El control norteamericano, sobre la estructura del CONDECA se realiza en dos planos: a nivel nacional, mediante la participación de las Misiones Militares estadounidenses en la dirección superior de los ejércitos locales; a nivel regional, con la presencia de consejeros norteamericanos de las tres ramas de los servicios armados en las labores del Consejo mismo.

Si diversos obstáculos diplomáticos y políticos han malogrado la creación de un ejército continental, integrado por tropas metropolitanas y unidades coloniales, la situación real no se aparta mucho del modelo teórico. A través de los convenios bilaterales de evidente inspiración imperial, las fuerzas armadas latinoamericanas se han transformado en instrumento político privilegiado para garantizar la hegemonía norteamericana y hacer de la soberanía de los pueblos una simple expresión retórica.

En los últimos diez años la condición brasileña de "satélite privilegiado" comienza a adquirir un significado militar.

Desde la última guerra Brasil viene aceptando como un hecho inevitable la división bipolar del mundo y el liderato fatal de los Estados Unidos sobre el llamado "mundo libre". A partir de tal premisa, los geopolíticos formados en las Escuelas Superiores de Guerra— a cuya cabeza se acostumbra colocar a Golbery do Couto e Silva, principal consejero del presidente Geisel y sus posteriores— exaltan el rol internacional, del país como potencia subordinada, pero dueño a la vez de un cierto grado de autonomía. En esa línea de pensamiento, los equilibrios Militares del continente sudamericano quedan sustancialmente condicionados por la gravitación económica y la proyección política del Brasil. Desde 1964, fecha en que los militares derrocaron el último gobierno civil, el programa hegemónico del subimperialismo ha tenido éxitos notables, imponiendo su influencia preponderante sobre los tres estados que lo separan de Argentina: Uruguay, Bolivia y Paraguay. Hasta aquí el arma principal ha sido de tipo económico: tratados para la explotación común de recursos naturales, como las centrales hidroeléctricas de Itaipú, el fierro del El Mutún y el gas de los yacimientos

de Santa Cruz, o empresas binacionales de colonización y desarrollo industrial, o aportes financieros públicos o privados, pero el resultado final tiene un inconfundible sello político.

Ya hemos recordado que Brasil fue la única nación que no se limitó a enviar contingentes simbólicos contra Santo Domingo, pero su vocación intervencionista no se ha detenido allí. Dos años más tarde diversos órganos de prensa uruguayos dieron a conocer el documento secreto intitulado "Orientación General de Planificación de la Seguridad Nacional": en la hipótesis que el comunismo alcance el poder en cualquier país latinoamericano o que la situación se agrave a consecuencia de la intensificación de la guerra revolucionaria, la frontera con el Uruguay, y por extensión el Río Grande do Sul, la frontera con Bolivia, particularmente la zona Corumbá Cáceres, la frontera con Venezuela y Guyana, constituyen zonas estratégicas y aun eventuales zonas de intervención del poder militar brasileño".

Por algún tiempo los instrumentos económicos, la presión diplomática y la conspiración política han sido medios suficientes para alcanzar las metas inmediatas de la política brasileña, pero las más ambiciosas requieren cada vez más el empleo directo o indirecto de recursos militares. Eduardo Galeano, en sus "Crónicas latinoamericanas", nos habla de la disposición del general Orlando Geisel, cuando desempeñaba el cargo de Ministro de Defensa, en orden a asegurar la contribución armada del Brasil al Paraguay "en caso de agresión extranjera".

El proceso de penetración en Bolivia ha sido mucho más brutal. En todos los conatos enderezados a derrocar el gobierno del General Torres estuvo comprometido el de Brasilia, a través de agentes directos, como el ex-diplomático y general Hugo Gethlen, a quien "El Diario" de La Paz acusó de haber proporcionado 60 mil dólares como anticipo contante y sonante para financiar un golpe, pero también con un consistente apoyo militar. El 20 de agosto de 1971, el cotidiano "Jornada" de la capital boliviana denunciaba la "intervención de las fuerzas militares y paramilitares de un país vecino" y la llegada de dos aviones de las fuerzas aéreas brasileñas con un cargamento de armas destinadas a las milicias reclutadas, por la oligarquía cruceña. El mismo día de la denuncia estallaba el alzamiento para abatir el gobierno izquierdista del presidente Torres. Obviamente, la estrategia de los conjurados consistía en establecer eventualmente un gobierno paralelo en Santa Cruz, pro-

vincia donde los intereses brasileños, son considerables. Para asegurar un apoyo decisivo a la insurrección, si el golpe en la capital fracasaba, la Brigada Mixta Aerotransportada de Corumbá, del Segundo Cuerpo de Ejército, bajo el comando del general Ramiro Gonçalves Lima, fue desplegada a lo largo de la frontera e incluso en algunos puestos al interior del territorio boliviano. Así, la victoria de Banzer fue, en los hechos, una victoria brasileña. Para subrayar su significado, sólo una semana más tarde el Banco Agrícola de Bolivia recibía un crédito de 5 millones de dólares del "Investexport del Brasil, destinado a proporcionar préstamos a los agricultores de Santa Cruz. Una cifra igual fue concedida al gobierno golpista por el Banco del Brasil, que simultáneamente financió en todo el país una espectacular campaña de propaganda bajo el lema "Bolivia, puedes contar conmigo! — Banco del Brasil S. A. ". Banzer siguió contando con el Banco, pero también con los Militares brasileños, hasta su final, particularmente en la habilitación de una formidable infraestructura aérea y el fomento de la aviación militar, para hacer del altiplano la última escala antes de alcanzar las Costas del Pacífico. Cuando la tensión con Chile provocada por la campaña boliviana de retorno al mar alcanzaba su punto crítico, desde Brasilia llegaba la noticia de la venta de 18 aviones Xavante, a reacción, fabricados con licencia de la Aermacchi Italiana, para reforzar el poderío aéreo de La Paz. En todo caso el apoyo del Brasil busca su afirmación geo-estratégica y no se compromete —por tanto— a ultrance con individuos, los sabe abandonar para optar por quienes los desplazan.

El predominio sobre el Uruguay, fue alcanzado con medios semejantes, es decir, combinando la presión pacífica con la amenaza militar. El mismo año de 1971, en vísperas de las elecciones presidenciales que ofrecían una cierta perspectiva de victoria al Frente Amplio, de tendencia de izquierda, los gobernantes de Brasilia elaboraron el plan llamado "Operación Treinta Horas", destinado a ocupar Militarmente la República Oriental. Revelaciones del general argentino Osiris Villegas, ex-embajador ante Itamaraty, de las revistas "Marcha", de Montevideo, y "Primera Plana", de Buenos Aires, permitieron conocer sus términos principales: "La ocupación del Uruguay —se decía allí— ofrecería una nueva perspectiva a la urgente necesidad de expansión del Brasil y permitiría, con el expediente del control económico, la consolidación progresiva de la paz social interna". Wilson Ferreira Aldunate, jefe del Partido Nacional uruguayo, declaró después, en Buenos Aires que el golpe realizado por la derecha y las fuerzas armadas con Bordaberry co-

mo protagonista principal, tuvo el apoyo de la dictadura militar brasileña tanto en las fases preparatorias como en su ejecución. Hay la certeza, igualmente, de que el gobierno de Bordaberry recibió urgente ayuda en carburantes y medios de transporte en los días de la huelga general con que los trabajadores intentaron frenar la marcha hacia la dictadura. Omitimos aquí la descripción de los mecanismos económicos empleados por el Brasil para implantar su virtual dominación sobre la orilla Oriental del Plata, así como la estrechísima alianza que une a ambos gobiernos en materia de represión, que se han examinado en múltiples documentos y denuncias. Tampoco nos referimos a la comprobada participación brasileña en planes de represión y de "interrogación" a prisioneros políticos en distintos países latinoamericanos.

En el caso de Chile hay abundantes indicios de la participación norteamericana, y, brasileña en el golpe del 73, en el terreno militar y policial, que van mucho más allá, por supuesto, de los vínculos institucionales ya denunciados, de las nociones doctrinarias de signo hemisférico y de las comunes tendencias conservadoras. Pocas dudas caben, por ejemplo, del apoyo logístico brindado por el Grupo de Tarea Norteamericano de la Operación Unitas XIV a las unidades navales que ocuparon el puerto del Valparaíso en la madrugada del 11 de septiembre. Tres destructores (Richmond K. Turner, "Vesole" y "Tattnell") y un submarino ("Glamagore"), al mando del contraalmirante Robert Monroe, estaban en estrecho contacto desde los días anteriores con la Comandancia Naval chilena y los jefes de la sublevación en la Base principal de la escuadra. Diversos antecedentes permiten suponer que se planeaba establecer un gobierno alternativo en Valparaíso, en caso de encontrar resistencia consistente en las fuerzas leales en el resto del territorio. En los días del alzamiento, la prensa sudamericana informó de la presencia de aviones norteamericanos de guerra en Mendoza —a diez minutos de vuelo de Santiago—, y en Asunción y Paraguay.

La activa participación de policías brasileños en las semanas siguientes al golpe y la estrecha colaboración castrense brasileño —chilena son temas suficientemente ilustrados en varias denuncias internacionales. Actualmente se puede encontrar material militar de origen brasileño, principalmente vehículos y equipos de comunicaciones, en casi todas las unidades terrestres, navales y aéreas de Chile.

Hoy, las metas geopolíticas de la dictadura brasileña se proyectan más allá de los espacios continentales, se extienden sobre todo en el Atlántico Sur y comienza a tocar el Litoral Africano. Para cumplir tan ambiciosas tareas se realiza un esfuerzo militar de dimensiones colosales, tanto en la adquisición y fabricación de armas corrientes como en el acelerado desarrollo de la Industria aero-espacial. Mientras el presupuesto de defensa ha pasado largamente los 1.000 millones de dólares anuales (1283 millones de 1975) las fuerzas armadas se equipan con armas modernas y sofisticadas de alta eficacia. Un artículo aparecido en la Revista "Crisis" (octubre de 1965) y firmado por Ugo Scarone, trae una relación impresionante de arsenal misilístico en poder de los militares brasileños. Misiles franceses "Exocet", superficie-superficie, británicos "Seacat" y "Seadart" para empleo naval, cohetes australianos antisubmarinos "Icara", y, en fin, cohetes antitanques "Cobra 2.000", producidos en el país con licencias de la Alemania Federal, son algunos de los modernísimos ingenios con que se equipan las formaciones del subimperialismo. No se divisa ninguna justificación para esta fiebre armamentista que no sea el propósito de consolidar la creciente hegemonía del Brasil en Sudamérica.

Como se sabe, Brasil no ha firmado hasta hoy el tratado de no proliferación de armas nucleares, y, a pesar de ello, Alemania Federal ha suscrito con el gobierno lo que "Le monde" (30 de junio de 1975) calificó como "El más grande contrato de exportación jamás concluido por la República Federal", en el curso de 15 años, 8 centrales nucleares de construcción alemana serán transferidas al Brasil, y se instalarán allí, además, una usina de recuperación de combustible irradiado y una usina para el enriquecimiento del uranio, con un costo global de unos 12.000 millones de marcos alemanes. La prensa Europea no vacila en atribuir al acuerdo un significado trascendental, sea para el desarrollo nuclear en Alemania, que asegura su aprovisionamiento de uranio por treinta años, sea por la firme base científico-tecnológica que proporciona a la industria bélica del Brasil para lograr la producción de la bomba atómica. El papel del subimperialismo en el "nuevo orden" de la América del sur como se ve, se hace cada vez más amenazante y complejo. Aquí debe hallarse el orgen de una carrera armamentista que envuelve a casi todos los países del área, pero, preferentemente a los que se sienten más inseguros: Argentina, Perú y Venezuela. Recientemente, el Brasil ha iniciado un proceso de Institucionalización política que se propone recuperar la juridicidad tradicional, con el fin de acceder al concierto internacional en mejores condiciones.

Finalmente, es cierto que "seguridad hemisférica", "solidaridad Interamericana", "defensa de la democracia", "Asociación Madura", "Lucha contra el comunismo internacional", y, etcétera, son valores utilizados solamente para reafirmar la hegemonía norteamericana del continente. Sin embargo, no quisiéramos dejar la impresión de que el recurso a la dictadura militar ha vuelto invulnerable la dominación imperialista, porque por sobre las precauciones y predicciones dominantes surgen problemas inesperados en el sistema mundial de las relaciones con los países de América Latina.

No se exagera cuando se dice que —en los términos latinoamericanos de hoy— "El ejército es el partido que la nación arma y paga contra sí misma", pero, en el fondo, la sustitución de los viejos procedimientos de sujeción y vasallaje por el empleo brutal y desvergonzado de las armas, el paso de los métodos indirectos y sibilinos de opresión a aquellos abiertamente represivos, el reemplazo de la manipulación pacífica de las masas —a cargo de oligarquías serviles y de políticos venales— por tiranías que ni siquiera intentan esconder su condición colonial, prueban sólo dos cosas: en primer lugar, que una mayoría abrumadora y creciente de latinoamericanos se alista en las filas antiimperialistas; por eso la vieja democracia liberal deja de ser útil como baluarte de los privilegios. En segundo lugar, que las estructuras institucionales e ideológicas de la dependencia militar son la última barricada del imperialismo.

Las relaciones de servidumbre y explotación, tanto en el interior de las sociedades latinoamericanas como en sus aspectos externos, nunca fueron tan oprobiosas y duras, pero jamás tampoco tan transparentes. Por eso la conciencia latinoamericana crece en las minas y en las fábricas, comienza a contagiar a los indios y los campesinos, compromete en la lucha a los estudiantes y los intelectuales, y algún día escalará también las murallas de los cuarteles, porque cada vez se comprende mejor que el interés patriótico y la soberanía nacional no se expresa en los tratados interamericanos.

Una prueba la dio el conflicto bélico desatado por Inglaterra contra Argentina. El TIAR —expresión pura del interamericanismo— no es un sistema para operar en relación con los intereses latinoamericanos, sino que es un instrumento para asegurarle a Estados Unidos —y bajo el control de su absoluta voluntad— la participación de los ejércitos de estos países cuando se enconen las relaciones internacionales del gran país del norte.

Ojalá la evidencia de "La Guerra de Las Malvinas" penetre objetivamente en las conciencias patrióticas para captar que el sistema interamericano, como instrumento político de relaciones continentales, es obsoleto porque hoy menos que antes no hay equilibrio o intereses comunes entre Estados Unidos y los socios del sur. Hay crisis en las normas de las relaciones latinoamericanas en todos los aspectos y hay que buscar soluciones nuevas; establecer estructuras diferentes a las imaginadas por los interamericanistas y decidirse por instrumentos autónomos y soberanos del subsistema latinoamericano, parece ser la idea que se abre paso en los gobiernos más libres. Mientras tanto los pueblos siguen espectadores el comportamiento de sus clases dirigentes.

OSCAR NUÑEZ. Sociólogo chileno, profesor de la Universidad Central, teórico de la comunicación y ensayista.

